

Santiago, dieciocho de enero de dos mil veintitrés

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada de fecha catorce de junio de dos mil veintidós, dictada por la jueza titular del 8° Juzgado Civil de Santiago, doña Sylvia Papa Beletti, con excepción de los considerandos 7° al 16°, y 19° al 25°, que se eliminan. No se elimina el considerando 21° por no existir.

Y se tiene, además, y en su lugar presente:

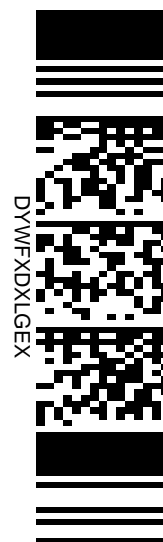
PRIMERO: Que por sentencia de 14 de junio de 2022, en causa Rol C-24882-2019, del 8° Juzgado Civil de Santiago, se resolvió lo siguiente: 1.- Que se acoge la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile; y en consecuencia, se rechaza en todas sus partes la demanda de indemnización de perjuicios opuesta a folio 1 por el demandante Víctor Enrique Caripillán Paine. 2.- Que se rechaza la excepción de reparación integral opuesta por la demandada. 3.- Que cada parte pagará sus costas, por estimarse que han tenido motivo plausible para litigar.

SEGUNDO: Que por el presente recurso de apelación la parte demandante solicita: a) Que se confirme el rechazo de la excepción de reparación integral interpuesta por el Fisco de Chile. b) Que se revoque la sentencia definitiva de primera instancia, en cuanto acoge la excepción de prescripción extintiva, que fue interpuesta por la defensa fiscal, la cual le permite concluir a la sentenciadora rechazar la demanda, y en su lugar pide que se rechace la excepción de prescripción extintiva, y que se acoja la demanda de indemnización de perjuicios en todas sus parte, ordenando pagar a la víctima demandante la indemnización correspondiente a trescientos millones de pesos, o la suma que esta Corte considere de justicia y equidad. c) Que se condene en costas a la demandada.



Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, apela de dicha sentencia, solicitando la revocación en la parte civil, y declarar que se acoge la excepción de reparación integral del Fisco, junto con la excepción de la prescripción acogida.

TERCERO: Que en su recurso, la parte demandante alega, que la sentencia rechazó su demanda, porque acogió la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile. La recurrente y demandante en esta causa considera que desde una perspectiva jurídica es insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil, manifestando que tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de “otras” normas jurídicas no solo de carácter internacional (Ius Cogens y Tratados Internacionales) sino también constitucionales y administrativas, que han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de graves violaciones a los derechos humanos. El recurrente expresa que el fallo de primera instancia incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del Derecho Privado. Agrega el demandante, que de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un error ignorar que dicho tratado internacional ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes, citando al respecto, el artículo 63 de dicha Convención, y señalando que existe enorme cantidad de jurisprudencia de la CIDH en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo. Agrega la demandante, entre otros argumentos, que el error de derecho en que incurrió el tribunal civil de primera instancia al acoger la prescripción “*se explica por no haber advertido que el tema de fondo de este conflicto*



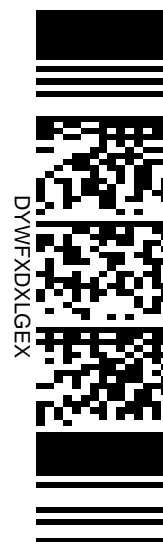
jurídico debe ser siempre analizado dentro de la esfera del Derecho Público”.

CUARTO: Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia de 14 de junio de 2022, ya que ésta le produce agravio al desestimar la excepción de reparación integral, al considerar que las indemnizaciones recibidas por el actor no son compatibles con esta nueva acción indemnizatoria.

La sentencia del tribunal *a quo*, en el motivo 23° rechaza la excepción de pago interpuesta por la defensa fiscal, ya que estima, *“que en esta sede, no se ha determinado la obligación indemnizatoria ni tampoco se ha fijado el monto de la obligación, para efectos de extinguirla a través del pago”.*

Señala el Fisco en su apelación, que el fundamento del considerando 23° es errado, ya que existe normativa legal al respecto, que constituye la forma en que el Estado repara a las víctimas de prisión y tortura, como lo señala el artículo 1° de la Ley 19.992, que contrariamente a lo dictaminado en dicha sentencia, cumple la obligación genérica del Estado de reparar con una justa indemnización que se materializa específicamente en la persona del demandante por aplicación de la referida ley.

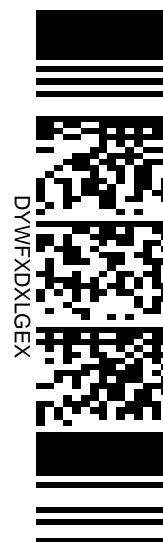
Arguye la demandada, que la acción interpuesta debió ser rechazada, ya que de conformidad a la Ley N°19.992, el demandante fue reconocido como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos e individualizado en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la nómina de personas reconocidas como víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N°1.040, de 2003, del Ministerio del Interior. Agrega el Fisco en su apelación, que de



acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.992 y a los bonos contenidos en la Ley 20.874, los demandantes se hicieron beneficiarios de los montos en dinero establecidos por dichos cuerpos legales, concluyendo, que es un principio general de derecho, sostenido por la doctrina, el que un daño que ha sido ya reparado no da lugar a otra indemnización, por lo que concluye, que tales prestaciones fueron claramente indemnizatorias.

El Fisco solicita que se acoja la apelación y se enmiende con arreglo a derecho el referido fallo, revocándolo en la parte civil, y declarando que se acoge la excepción de reparación integral del Fisco, junto con la excepción de prescripción acogida por la sentencia apelada.

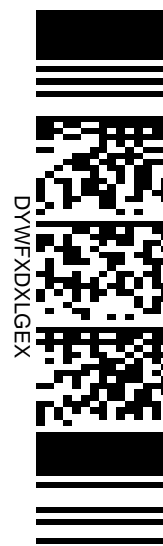
QUINTO: Que previo a analizar la excepción de prescripción extintiva, opuesta por el Fisco, la cual fue acogida en primera instancia, esta Corte estima necesario hacer presente que con la aprobación por parte del Estado de Chile del Pacto de San José de Costa Rica el 23 de agosto de 1990, mediante Decreto Supremo N° 873, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991, nuestro país se ha integrado al denominado “Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, lo que significa que este sistema está conformado por un conjunto de normas y principios sobre los derechos esenciales de las personas. A través de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, los Estados Partes se someten a un ordenamiento jurídico internacional superior, asumiendo la obligación de proteger los derechos humanos, no en relación con otros Estados, sino en relación a los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales chilenos forman parte integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tienen la obligación de aplicar sus normas.



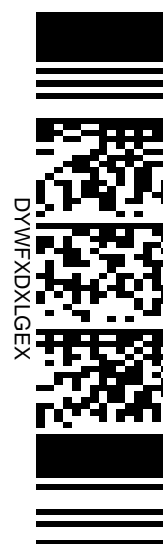
Por otra parte, también es necesario tener presente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, norma internacional que también es norma nacional, al haber sido ratificada dicha Convención por Chile, incorporándose a nuestro derecho interno por Decreto Supremo N° 381, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 22 de junio de 1980. La citada Convención, que es parte de nuestro derecho interno, dispone en el artículo 26: *“Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”*. Y el artículo 27, establece lo siguiente: *“El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”*.

Que en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar, dispone en el artículo 63.1: *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, disposición que debe interpretarse acorde a la reiterada jurisprudencia que se ha dictado, no sólo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constituye el órgano autorizado para determinar su sentido y alcance, sino que también por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

SEXTO: Que respecto de la prescripción extintiva alegada por el Fisco de Chile, y acogida por el tribunal *a quo*, cabe señalar que las normas del derecho internacional sobre derechos humanos se



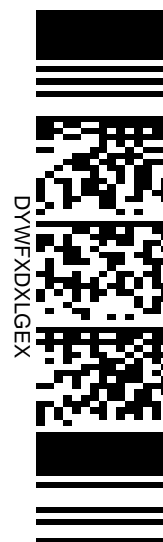
encuentran incorporadas y reconocidas en nuestra Constitución Política de la República en el artículo 5°, inciso 2°, lo que permite sustentar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que abarca tanto el ámbito penal como las consecuencias patrimoniales ocasionadas a las víctimas de esos crímenes, porque el Estado de Chile ha asumido la obligación de respeto, garantía y promoción de esos derechos fundamentales, de forma tal que si se establece que existió una vulneración a esa obligación internacional, el Estado está obligado a indemnizar; por ende, esta declaración de efectuarse reparaciones en favor de la víctima -que puede traducirse en una indemnización civil-, puede y debe ser declarado por los tribunales de justicia, para cumplir dicho compromiso internacional y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado y en una doble vulneración de las garantías conculcadas a la víctima, no pudiéndose considerar su propia normativa interna para eximir al Estado de su cumplimiento. La prescripción extintiva de que trata el Código Civil es aplicable a las obligaciones civiles de índole patrimonial, pero no es aplicable la institución de la prescripción para las obligaciones que derivan de la responsabilidad del Estado por graves violaciones a los derechos humanos, ya que no se puede sostener que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y por otra parte sustentar que las reparaciones indemnizatorias por tales violaciones prescriben por aplicación de normas de derecho interno, ya que dichas indemnizaciones son consecuencia directa de las transgresiones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado; por ende, se rigen por normas de derecho internacional de los derechos humanos y por norma del *ius cogens*, es decir, aquellas normas imperativas de derecho internacional general. En relación a este principio, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita y ratificada por Chile, establece en el artículo 53, que para los efectos de



dicha Convención, *“una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”*.

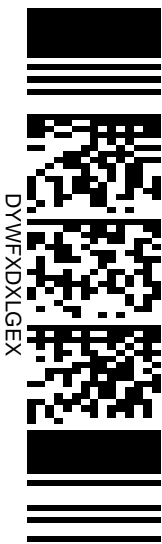
SÉPTIMO: Que atendido los hechos establecidos en la sentencia recurrida, no es posible resolver la acción indemnizatoria deducida en esta causa, sólo en base a disposiciones civiles, ni a una normativa interna aplicable para cualquier delito común, porque en la especie resulta aplicable el estatuto jurídico establecido para los crímenes de lesa humanidad, el que establece la imprescriptibilidad de ellos, de manera tal, que las normas del derecho común interno, se aplicarán sólo si no están en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como a las reglas imperativas de derecho internacional.

Cabe destacar que con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado de Chile se obligó a adoptar disposiciones de derecho interno que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, como lo prescribe el artículo 2 de dicha Convención, que establece: *“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”*. En consecuencia, en cumplimiento de este compromiso internacional el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en dicha Convención, y a garantizar su pleno y libre ejercicio, recibéndolos en su derecho interno y



haciéndolos propios, dictando las medidas legislativas o de otra naturaleza, necesarias para hacerlos efectivos. Por esta razón, a falta de legislación interna que garantice dichos derechos y libertades, facultan al órgano jurisdiccional nacional para hacerlos reales y concretos.

OCTAVO: Que para reforzar la idea de que las acciones civiles por graves violaciones a los derechos humanos no están sujetas a las normas sobre prescripción y que las víctimas puedan obtener una reparación integral por los daños causados, el Estado de Chile ha hecho un reconocimiento expreso en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile”, en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, citando dicha sentencia en el párrafo 19, lo señalado por el Estado en su contestación, quien manifestó que, *“al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada”*. Así, *“previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: En primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias. No obstante, el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser*



adoptadas por [la] Corte, tomando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria”.

NOVENO: Que atendido a lo expresado en los considerandos quinto a séptimo de esta sentencia, especialmente el artículo 5°, inciso 2° de la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las normas del *ius cogens*, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, no es posible acoger la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile; por consiguiente, la acción indemnizatoria por graves violaciones a los derechos humanos interpuesta por el demandante, no se encuentra sujeta a prescripción.

DÉCIMO: Que siendo imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, esto tiene como consecuencia inevitable que la acción civil de indemnización de perjuicios que de ellos se deriven, siga la misma suerte, y por tal razón, la excepción de pago interpuesta por el Fisco, deberá ser rechazada, confirmando de esta forma el rechazo efectuado por el tribunal *a quo* en la sentencia apelada. Por tanto, tratándose de delitos de grave violación de los derechos humanos, el paso del tiempo no impide que la víctima de autos pueda obtener una reparación integral por los daños sufridos por agentes del Estado.

UNDÉCIMO: Que habiéndose acreditado en el proceso que las violaciones a los derechos humanos sufridos por el actor, afectaron la vida e integridad física y psicológica, las que son graves, quien fue



detenido ilegalmente en dos oportunidades, y que durante dichas privaciones de libertad fue sometido a torturas y diversos vejámenes, siendo relegado a Quillagua, en la Segunda Región del país, y que el actuar de los agentes del Estado no respetó los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber del Estado impedir su transgresión, protegerlos y garantizar su libre y pleno ejercicio, por lo que el Estado se encuentra obligado reparar el daño moral causado.

DUODÉCIMO: Que en consecuencia, y teniendo presente lo relacionado y razonado precedentemente, esta Corte estima que prudencialmente debe fijarse como indemnización por daño moral la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), debidamente reajustadas de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia se encuentre firme o ejecutoriada y la fecha de su pago efectivo, y devengará intereses legales desde que el Fisco se encuentre en mora en cumplir lo resuelto hasta la fecha del pago efectivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que **se revoca** la sentencia apelada de fecha catorce de junio de dos mil veintidós, dictada por la jueza titular del 8° Juzgado Civil de Santiago, por la que se acogió excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile y se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios opuesta por el actor, y en su lugar se declara que: a) se rechaza la excepción de prescripción alegada por el demandado; y b) **se acoge** la demanda y se condena al demandado Fisco de Chile al pago de una indemnización a favor de don Víctor Enrique Caripillán Paine, ascendente a la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), suma que se pagará reajustada de acuerdo a la variación del índice de Precios al Consumidor, calculado desde la fecha en que se encuentre



firme o ejecutoriada esta sentencia y hasta la fecha del pago efectivo de la indemnización, y que devengará intereses legales desde que el Fisco se encuentre en mora de cumplir lo resuelto; sin costas, al estimar que la demandada tuvo motivos plausibles para litigar.

II.- Que **se confirma**, en lo demás apelado, la sentencia referida.

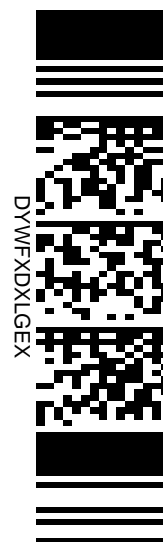
Redacción del abogado integrante Claudio Gonzalo García Lamas.

No firma el Ministro (i) señor de la Noi, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.

No firma la Ministro (s) señora Orellana, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.

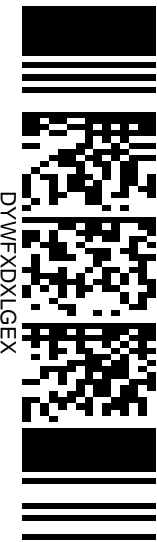
Regístrese y comuníquese.

Rol IC Civil N° 12188-2022



Proveído por el Señor Presidente de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.